

El gobierno de facto en Bolivia y sus crímenes contra la humanidad

Desde las elecciones del 20 de octubre de 2019, Bolivia atraviesa la peor crisis política de su historia. El Tribunal Electoral confirmó la victoria de Evo Morales por un 47,08% de los votos emitidos con una diferencia mayor al 10% (648.180 votos) sobre el candidato Carlos Mesa por lo que fue suficiente para ganar las elecciones en primera vuelta.

La primera afirmación de fraude por parte de la OEA desencadenó violencia de parte de los grupos de choque de la oposición que quemaron los tribunales electorales departamentales y sedes del partido Movimiento Al Socialismo MAS-IPSP. Muchas autoridades como la alcaldesa de Vinto en Cochabamba Patricia Arce, el ex viceministro de interculturalidades Feliciano Vegamonte, el presidente de la cámara de diputados Víctor Borda, el ministro de minería César Navarro y sus familias fueron secuestrados y brutalmente agredidos obligándolos a renunciar a sus cargos.

El amotinamiento de fuerzas policiales en todo el país y las FFAA acuarteladas dieron pie a una campaña de terror en contra del “masismo”, cuyos miembros fueron amenazados, secuestrados, torturados, sus domicilios particulares quemados en un ambiente de total impunidad, obligándolos a la renuncia en el caso de ser autoridades como la alcaldesa de Vinto en Cochabamba.

Con la sugerencia de renuncia del Presidente Evo Morales realizado por el comandante de las FFAA, el 10 de noviembre, Morales se vio obligado a dimitir argumentando con ello que esa decisión pondría alto a la violencia de la oposición y sus grupos de choque y paramilitares (motoqueros).

Consumado el golpe con la renuncia de Evo Morales, se desató la represión de los grupos paramilitares apoyados por la Policía y las FFAA, calificando a los manifestantes que defendían al gobierno de “turbas”, “vándalos”, “radicales” o “delincuentes”. Las redes sociales y la mayoritaria y casi hegemónica prensa privada sostuvieron una campaña de propaganda a favor del golpe de estado.

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho, el principal líder de las bandas paramilitares amenazó a los “masistas”, autoridades de gobierno y empresarios de Santa Cruz simpatizantes del Gobierno de Evo Morales, con tener preparada una lista de traidores a los que se eliminaría al estilo de Pablo Escobar en Colombia.

La oposición al gobierno del Presidente Evo Morales, conformó milicias armadas que contaron con el apoyo abierto de la Policía boliviana. Grupos como la Unión Juvenil Cruceñista, definida por la Federación Internacional de Derechos Humanos como “grupo paramilitar fascista”, fueron los principales ejecutores de la represión.

Se asaltaron y destruyeron los medios de comunicación de las organizaciones campesinas como la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), cuyo director, José Aramayo, fue amarrado a un árbol y torturado, así como la de las organizaciones sociales de base como las radios comunitarias (RPOs), o BTV, el canal de televisión estatal. Al ser señalados como partidarios del gobierno, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación de servicio público fueron atacados, humillados e impedidos de trabajar.

Mediante redes sociales circuló un listado de lugares para bloquear que incluye las sedes de ministerios y otras instituciones estatales, residencias de funcionarios gubernamentales y las misiones diplomáticas de Cuba y Venezuela. A raíz de acusaciones falaces, grupos violentos iniciaron el hostigamiento permanente de dichas Embajadas y la persecución

constante a su personal diplomático, hasta lograr que este salga del país. Estas acciones violentas vulneran el derecho internacional, la Convención de Viena y otros tratados internacionales.

Como pudieron verificar los organismos de DDHH que vinieron al país, el 15 de noviembre, una marcha de campesinos de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba fue balaceado en Sacaba con 9 víctimas mortales y decenas de heridos. A través de videos grabados por los propios campesinos se pudo evidenciar el uso de armamento de guerra. Las FFAA actuaron ese día amparados en el DS N°4078 que les permitía el uso de armamento bélico sin responsabilidades posteriores.

Lo mismo pasó en Senkata, El Alto, provocando la muerte de al menos 10 personas y decenas de heridos cinco días después. Las fuerzas represoras conformadas por la Policía y las FFAA indicaron que actuaron en contra de “terroristas”, que querían provocar una explosión de la planta de gas. Los movimientos sociales, antiguos miembros del gobierno, campesinos e indígenas que se manifestaban en contra del golpe de estado son asesinados, el total de las víctimas asciende a 35 muertos y más de 800 heridos.

El 25 de noviembre miembros del brazo paramilitar del gobierno de facto ocuparon la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz para quemar sus equipos y documentación. Estas operaciones continúan hasta el día de hoy. El viernes 17 de enero se informó de la eliminación de las antenas de la Empresa ENTEL en varias provincias rurales que proveía de los servicios de acceso a comunicación celular y radiofónica.

El 6 de diciembre, el gobierno de facto, aprobó el DS N°4100 cuyo objeto era el de indemnizar a los familiares de los 35 fallecidos y centenares de heridos por la represión policial y militar, con la condición a que renunciaran a llevar el caso a las Naciones Unidas u otros organismos de derechos humanos.

Al respecto, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) expresó su preocupación ante el decreto, por incluir una cláusula que imposibilitaría el recurso de las víctimas a instancias internacionales para denunciar los crímenes de los que fueron víctimas violando tratados internacionales como el Tratado de Roma que prevé el principio de imprescriptibilidad en materia de crímenes contra la humanidad. La Misión de observación de la CIDH, que recogió numerosos testimonios de las masacres de Sacaba y Senkata, denunció que en Bolivia no existe **“ninguna garantía de independencia del poder judicial”**.

La persecución, las detenciones arbitrarias, las amenazas de muerte contra ex autoridades del gobierno de Evo Morales, así como a dirigentes de organizaciones sociales y del MAS han sido cotidianas. Es evidente la judicialización de la protesta social y de la libertad de expresión (Incendios de casas, linchamientos, ataques racistas, etc.).

La Defensoría del Pueblo de Bolivia, también ha sufrido hostigamiento, principalmente en la ciudad de Cochabamba, tanto en las oficinas de dicha entidad así como en los domicilios privados de sus representantes y sus familias.

Por otra parte, el permanente hostigamiento a la embajada y residencia de México, viola todas las convenciones y acuerdos internacionales que protegen a las representaciones diplomáticas de los diferentes países. La no emisión de salvoconductos para personas que solicitaron asilo político, que además fue otorgado por dicho país, es una flagrante violación de los derechos humanos y políticos de las personas.

Cabe destacar la persecución de altos funcionarios del gobierno de Morales asilados en la embajada de México en La Paz y a quienes se les niega la emisión de un salvoconducto para que puedan abandonar el país como el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; el ex ministro Hugo Moldiz; la ministra de Culturas Wilma Alanoca; el gobernador de Oruro Víctor Hugo Vázquez; el director de gobierno electrónico Nicolás Laguna; el ministro de Defensa Javier Zavaleta; el ministro de Justicia Héctor Arce, el de Minería César Navarro entre otros.

Es evidente que las acusaciones en contra de las ex autoridades son parte de una estrategia de persecución político-judicial, denominada “Lawfare”, que pretende anular la participación política del MAS-IPSP en las próximas elecciones programadas para el 3 de mayo.

El ministro de gobierno de facto, Arturo Murillo, afirmó que iría de “cacería” contra miembros del gobierno destituido y del MAS. Hizo pública su intención de llevar a Evo Morales ante la Corte Penal Internacional de La Haya “por crímenes de lesa humanidad”, culpándole de las 35 víctimas mortales, incluso después de su dimisión y exilio del país. Las masacres de Senkata, Sacaba, Huayllani, Ovejuyo, etc., fueron documentadas por diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos y por países amigos. La información de primera mano levantada por éstas da testimonio de la brutalidad del golpe de estado en Bolivia.

El uso de adjetivos agraviantes y denigrantes por su contenido discriminatorio es frecuente de parte del gobierno de facto como el hecho de referirse como “salvajes”, “narcoterroristas”, “vándalos”, “delincuentes”, etc., en contra de los miembros del gobierno de Evo Morales y las organizaciones sociales que lo respaldan, así como a las misiones internacionales de observación de derechos humanos, a la defensoría del pueblo e incluso a los periodistas, tildándolos de “guerreros digitales” o “terroristas informáticos”.

Murillo, celebra y se ufana del miedo sembrado en la gente por la “pacificación” a través de la brutalidad policial/militar en contra de la subversión de las “hordas indígenas y masistas”. Se “matan entre ellos”, *“No toleraremos terroristas ni sediciosos, los estamos vigilando”*, afirma.

El gobierno de facto impuesto por la violencia de los grupos paramilitares y policiales, así como por las FFAA, eliminó derechos fundamentales a la protesta y al derecho al voto que fue desconocido por las élites que ahora gobiernan el país como lo había hecho durante los 180 años de la República colonial y excluyente.

El gobierno de facto ha militarizado el país y reprimido cualquier tipo de protesta haciendo demostraciones de fuerza con militares y armas de guerra en las calles de las principales ciudades de Bolivia.

El argumento y la apelación a la amenaza terrorista, la denuncia de la existencia de núcleos subversivos o grupos sediciosos armados masistas justifican la necesidad de crear Unidades Especiales de la Policía para la lucha antiterrorista asesorada por el gobierno de Israel como afirma el mismo ministro de facto Murillo. Es la justificación para más violencia y brutalidad represiva estatal.

Se asegura la existencia de actividades sediciosas y terroristas para justificar la represión, se otorga impunidad a las fuerzas militares para masacrar indígenas, se militariza el país y se hace demostraciones de fuerza con el uso de armas de guerra.

La sistemática violación de los derechos humanos, las libertades públicas y los derechos y garantías individuales es resultado evidente de la existencia de un régimen dictatorial impuesto por un golpe cívico, policial y militar.

Liquidar toda fuente de información independiente es parte de la estrategia de implementar un cerco mediático

Los organismos de derechos humanos de todo el mundo, deben presionar para que cesen la persecución política y la represión encabezadas por las bandas paramilitares protegidas por la Policía y las FFAA.

Por lo antes expuesto:

Condenamos el golpe de estado ejecutado y financiado por fuerzas de la derecha boliviana antidemocrática y otras fuerzas foráneas que pretenden recuperar el control de los importantes recursos naturales del país como el Litio y el Gas.

Condenamos enérgicamente los mensajes de odio y racismo, así como la violencia extrema perpetrada por los partidarios de la derecha radical antidemocrática contra los pueblos indígenas, campesinos.

Condenamos contundentemente el “Lawfare” del gobierno de facto que ha desplegado una maquinaria perversa de persecución política mediante un continuo linchamiento mediático, invención de causas judiciales y violación permanente de toda convención, norma internacional y constitucional de Bolivia.

Exhortamos a las FFAA y la Policía Nacional de Bolivia a velar y resguardar, ante todo, la vida y la dignidad de cada persona que se encuentre en territorio boliviano, sea cual sea su afinidad política o nacionalidad, así como a respetar la inmunidad de las representaciones diplomáticas y proteger sus funcionarios, asilados e instalaciones.

Hacemos un llamado a todas las fuerzas democráticas para que condenen este golpe violento, así como las violaciones cotidianas que conculcan todas las libertades individuales, sociales, jurídicas, culturales y políticas de las grandes mayorías.

Pedimos a la Comisión de DD.HH. de la ONU que en base a los informes, investigaciones y testimonios de la CIDH, la Defensoría del Pueblo de Bolivia y otras organizaciones de DD.HH. que inequívocamente condene la violación sistemática de los derechos ciudadanos, la brutal represión, los asesinatos y todos los demás atropellos de perpetrados por el gobierno de facto, hechos sobre los cuales urgentemente elabore un informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia.

Instamos también a seguir denunciando este golpe de estado perpetrado ante todos los organismos internacionales, la prensa y las autoridades de todos los Estados del mundo.

**¡NO AL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA!
¡NO A LA MILITARIZACIÓN EN BOLIVIA!**

Suiza, 19 de enero de 2020

The de facto government in Bolivia and its crimes against humanity

Since the elections of October 20, 2019, Bolivia has been going through the worst political crisis in its history. The Electoral Tribunal confirmed the victory of Evo Morales by 47.08% of the votes cast with a difference of more than 10% (648,180 votes) over the candidate Carlos Mesa, which was enough to win the elections in the first round.

The first allegation of fraud by the OAS triggered violence from opposition shock groups that burned down departmental electoral offices and headquarters of the Movement Towards Socialism MAS-IPSP party. Many authorities such as the mayor of Vinto in Cochabamba Patricia Arce, the former deputy minister of intercultural affairs Feliciano Vegamonte, the president of the chamber of deputies Victor Borda, the minister of mining Cesar Navarro and their families, were kidnapped and brutally attacked forcing them to resign their posts.

The mutiny of police forces throughout the country and the confinement of the Armed Forces to barracks gave rise to a campaign of terror against “*masismo*” (movement in support of the MAS), whose members were threatened, kidnapped, tortured, their homes burned down in an atmosphere of total impunity, forcing them to resign if they happened to be in a position of authority like the mayor of Vinto in Cochabamba.

With the suggestion that the President Evo Morales resigns made by the commander of the Armed Forces, on November 10, Morales was forced to resign decision he took with the hope it would put an end to opposition violence and of its shock and paramilitary groups (*motoqueros*).

Once the coup was completed with the resignation of Evo Morales, the repression of the paramilitary groups supported by the Police and the Armed Forces was unleashed, calling the demonstrators who defended the government “mobs”, “vandals”, “radicals” or “delinquents”. The social networks and the majority and almost hegemonic private media waged a propaganda campaign in support of the coup d'état.

The president of the Santa Cruz Civic Committee, Fernando Camacho, the main leader of the paramilitary gangs, threatened “*masistas*”, government authorities and businessmen in Santa Cruz who are sympathetic to the government of Evo Morales, with having a list of traitors ready to be eliminated in the style of Pablo Escobar in Colombia.

The opposition to President Evo Morales' government formed armed militias that had the open support of the Bolivian Police. Groups such as the Unión Juvenil Cruceñista, characterised by the International Federation of Human Rights as a “paramilitary fascist group”, were the main executors of the repression.

The media of campesino organizations such as the CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia – United Confederation of Rural Workers of Bolivia), whose director, José Aramayo, was tied to a tree and tortured, were assaulted and destroyed, as were those of grassroots social organizations such as community radio stations (RPOs), or BTv, the state television channel. Upon being singled out as supporters of the government, journalists and public service media workers were attacked, humiliated and prevented from working.

A list of places to blockade was circulated through social networks, including the headquarters of ministries and other state institutions, residences of government officials and the diplomatic missions of Cuba and Venezuela. As a result of false accusations, violent groups began the permanent harassment of these embassies and the constant persecution of their diplomatic personnel, until they force them to leave the country. These violent actions violate international law, the Vienna Convention and other international treaties.

As verified by the human rights organizations that came to the country, on November 15, a march of peasants from the six federations of the Tropic of Cochabamba was fired at in Sacaba with nine deaths and dozens of wounded. Through videos recorded by the peasants themselves, the use of war weapons was made evident. The Armed Forces acted on that day under the protection of Decree No. 4078, which allowed them to use war weapons exempted from responsibility over its consequences.

The same thing happened in Senkata, El Alto, causing the death of at least 10 people and dozens of wounded five days later. The repressive forces made up of the Police and the Armed Forces indicated that they acted against “terrorists” who wanted to provoke an explosion at the gas plant. The social movements, members of the former government, peasants and indigenous people who were demonstrating against the coup d'état are being assassinated, with a total of 35 dead and more than 800 wounded.

On November 25, members of the paramilitary arm of the de facto government occupied the headquarters of the Santa Cruz Federation of Peasant Workers to burn their equipment and documentation. These operations continue to this day. On Friday, January 17, it was reported that the antennas of the ENTEL Company that provided access to cellular and radio communication services were eliminated in several rural provinces.

On December 6, the de facto government approved Decree No. 4100, whose purpose was to compensate the families of the 35 dead and hundreds of wounded from the police and military repression, on condition that they abandoned taking the case to the United Nations or other human rights organizations.

In this regard, the IACHR (Inter-American Commission on Human Rights) expressed concern about the decree, because it included a clause that would make it impossible for victims to appeal to international bodies to denounce the crimes of which they were victims in violation of international treaties such as the Treaty of Rome, which provides for the principle of imprescriptibility with respect of crimes against humanity. The IACHR Observation Mission, which gathered numerous testimonies of the Sacaba and Senkata massacres, denounced that in Bolivia there is “**no guarantee of independence of the judiciary**”.

Persecution, arbitrary arrests, and death threats against former authorities of the Evo Morales government, as well as against leaders of social organizations and MAS have been daily occurrences. The judicialization of social protest and freedom of expression (burning house, lynchings, racist attacks, etc.) is evident.

The Bolivian Ombudsman's Office has also suffered harassment, mainly in the city of Cochabamba, both in the offices of this entity as well as in the private homes of its representatives and their families.

On the other hand, the permanent harassment of the embassy and residence of Mexico violates all international conventions and agreements that protect diplomatic representations

from all countries. The non-issuance of safe-conduct for people who have applied for political asylum, which besides, has been granted by that country, is a flagrant violation of people's human and political rights.

It is worth noting the persecution of senior officials of the Morales government who are sheltered in the Mexican embassy in La Paz and who are denied the issuance of safe conduct to leave the country, such as the Minister of the Presidency, Juan Ramón Quintana; former minister Hugo Moldiz; Culture Minister Wilma Alanoca; Oruro Governor Víctor Hugo Vázquez; e-government director Nicolás Laguna; Defense Minister Javier Zavaleta; Justice Minister Héctor Arce, Mining Minister, César Navarro and others.

It is clear that the accusations against the former authorities are part of a strategy of political-judicial persecution, known as "Lawfare", which aims to eliminate the political participation of the MAS-IPSP in the upcoming elections scheduled for May 3.

The de facto government minister, Arturo Murillo, stated that he would go on a "hunt" against members of the ousted government and the MAS. He made public his intention to take Evo Morales to the International Criminal Court in The Hague "for crimes against humanity", blaming him for the 35 deaths, even after his resignation and exile from the country. The massacres of Senkata, Sacaba, Huayllani, Ovejuyo, etc., were documented by different international human rights organizations and by friendly countries. The first-hand information gathered by these organizations gives testimony to the brutality of the coup d'état in Bolivia.

The use of adjectives that are offensive and denigrating because of their discriminatory content is frequent on the part of the de facto government, such as referring to "savages," "narcoterrorists," "vandals," "criminals," etc., to members of Evo Morales' government and the social organizations that support it, as well as international human rights observation missions, the Ombudsman's Office, and even journalists, calling them "digital warriors" or "computerised terrorists".

Murillo, celebrates and boasts about the fear sown in people for "pacification" through police/military brutality against the subversion of the "indigenous and masista hordes". They "kill each other", *'We will not tolerate terrorists or seditionists, we are watching them,'* he says.

The de facto government imposed by the violence of the paramilitary and police groups, as well as by the Armed Forces, eliminated fundamental rights to protest and to vote, not recognised by the elites that now govern the country as they had done during the 180 years of the hitherto colonial and exclusionary Republic.

The de facto government has militarized the country and repressed any kind of protest by making shows of force with military and war weapons in the streets of the main cities of Bolivia.

The argument and the reference to a terrorist threat, the denunciation of the existence of subversive nuclei or armed mass-oriented seditious groups justify the need to create Special Police Units for the fight against terrorism supported by the Israeli government as the de facto minister Murillo himself claims. This is the justification for more violence and repressive state brutality.

The existence of seditious and terrorist activities is confirmed so as to justify the repression, the impunity is granted to the military forces to massacre indigenous people, the country is militarized and shows of force with the use of weapons of war are carried out.

The systematic violation of human rights, public freedoms and individual rights and guarantees is an obvious result of the existence of a dictatorial regime imposed through a civic, police and military coup.

Eliminating all sources of independent information is part of the strategy of implementing a total media censorship.

Human rights bodies around the world must press for an end to the political persecution and repression led by paramilitary gangs protected by the police and the military.

For the above reasons:

We condemn the coup d'état executed and financed by anti-democratic Bolivian right-wing forces and other foreign forces that seek to regain control of the country's important natural resources such as Lithium and Gas.

We strongly condemn the messages of hate and racism, as well as the extreme violence perpetrated by the supporters of the anti-democratic radical right against the indigenous, peasant peoples.

We strongly condemn the "Lawfare" of the de facto government that has deployed a perverse machinery of political persecution through continuous media lynching, fabrication of legal cases and permanent violation of every convention, international norm, and constitutional norm of Bolivia.

We urge the Armed Forces and the Bolivian National Police to guard and protect, above all, the life and dignity of every person in Bolivian territory, regardless of their political affinity or nationality, as well as to respect the immunity of diplomatic representations and protect their officials, asylum seekers and facilities.

We urge the UN Commission for Human Rights that, on the bases of the reports, investigations and testimonies from the IAHCR, Bolivia's Ombudsman Office and other HH.RR. organisations, unequivocally condemns the systematic violation of the citizens' rights, the brutal repression, the killings and all other abuses perpetrated by the de facto government, facts on which it urgently elaborates a report on the human rights situation in Bolivia.

We call on all democratic forces to condemn this violent coup, as well as the daily violations that infringe all individual, social, legal, cultural and political freedoms of the immense majority.

We also urge you to continue to denounce this coup d'état before all international bodies, the press and the authorities of all the States of the world.

**NO TO THE COUP D'ÉTAT IN BOLIVIA!
NO TO MILITARIZATION IN BOLIVIA!**

Switzerland, 19 January 2020

Le gouvernement de facto en Bolivie et ses crimes contre l'humanité

Depuis les élections du 20 octobre 2019, la Bolivie traverse la pire crise politique de son histoire. Le Tribunal électoral a confirmé la victoire d'Evo Morales avec 47,08% des voix avec un écart de plus de 10% (648'180 voix) sur le candidat Carlos Mesa, ce qui a suffi pour remporter les élections au premier tour.

La première allégation de fraude émise par l'OEA a déclenché la violence des groupes de choc de l'opposition qui ont incendié les tribunaux électoraux départementaux et du siège du parti Mouvement Vers le Socialisme MAS-IPSP. De nombreuses autorités comme la maire de Vinto à Cochabamba Patricia Arce, l'ancien vice-ministre des affaires interculturelles Feliciano Vegamonte, le président de la chambre des députés Víctor Borda, le ministre de l'industrie minière Cesar Navarro et leurs familles ont été séquestrés et brutalement attaqués, les obligeant à démissionner de leurs postes.

La mutinerie des forces de police dans tout le pays et les forces armées cantonnées dans leurs casernes ont laissé libre cours à une campagne de terreur contre le "masismo" (mouvement en faveur du MAS), dont les membres ont été menacés, kidnappés, torturés, leurs maisons incendiées dans une atmosphère de totale impunité, les obligeant à démissionner si ces derniers étaient des autorités comme la maire de Vinto à Cochabamba.

Le 10 novembre, le commandant des forces armées a suggéré au président Evo Morales de démissionner, ce qui l'a obligé à renoncer à son poste en argumentant que cette décision mettrait fin à la violence de l'opposition et de ses groupes de choc et paramilitaires (motoqueros).

Aussitôt le coup d'Etat conclu avec la démission d'Evo Morales, la répression des groupes paramilitaires soutenus par la police et les forces armées s'est déclenchée, qualifiant les manifestants qui défendaient le gouvernement de " bandes ", de " vandales ", de " radicaux " ou de " délinquants ". Les réseaux sociaux et la presse privée majoritaire et presque hégémonique ont maintenu une campagne de propagande en faveur du coup d'État.

Le président du Comité civique de Santa Cruz, Fernando Camacho, le principal chef des bandes paramilitaires, a menacé les "masistas", les autorités gouvernementales et les hommes d'affaires de Santa Cruz sympathisants du gouvernement d'Evo Morales, d'avoir une liste de traîtres prêts à être éliminés à la manière de Pablo Escobar en Colombie.

L'opposition au gouvernement du président Evo Morales, a formé des milices armées qui avaient le soutien ouvert de la police bolivienne. Des groupes tels que l'Union juvénile de Santa Cruz, qualifiée par la Fédération internationale pour les droits humains de "groupe fasciste paramilitaire", ont été les principaux exécutants de la répression.

Les médias d'organisations paysannes comme la CSUTCB (Confédération Syndicale Unique des Travailleurs Paysans de Bolivie), dont le directeur, José Aramayo, a été attaché à un arbre et torturé, ainsi que ceux d'organisations sociales de base comme les radios communautaires (RPO), ou BTv, la chaîne de télévision publique, ont été attaqués et détruits. Les journalistes et les travailleurs des médias du service public qui étaient désignés comme des partisans du gouvernement ont été attaqués, humiliés et empêchés de travailler.

Une liste des lieux à bloquer a été diffusée sur les réseaux sociaux, parmi lesquels les sièges de ministères et d'autres institutions de l'État, les résidences de membres du gouvernement et les missions diplomatiques de Cuba et du Venezuela. Sous le couvert de fausses accusations, des groupes violents ont commencé à harceler en permanence ces

ambassades et à persécuter constamment leur personnel diplomatique, jusqu'à ce qu'ils soient contraints de quitter le pays. Ces actions violentes violent le droit international, la Convention de Vienne et d'autres traités internationaux.

Comme l'ont vérifié les organismes de défense des droits humains venus dans le pays, le 15 novembre, une marche de paysans des six fédérations du tropique de Cochabamba a été arrosée de balles à Sacaba, faisant neuf morts et des dizaines de blessés. L'utilisation d'armes de guerre a été mise en évidence par des vidéos enregistrées par les paysans eux-mêmes. Les forces armées ont agi ce jour-là sous le couvert du décret présidentiel DS n° 4'078, qui leur permettait d'utiliser des armes de guerre en toute impunité.

Cinq jours plus tard, le même scénario s'est produit à Senkata, El Alto, causant la mort d'au moins dix personnes et des dizaines de blessés. Les forces de répression composées de la police et des forces armées ont indiqué qu'elles agissaient contre des " terroristes " qui voulaient provoquer une explosion à l'usine de gaz. Les mouvements sociaux, les anciens membres du gouvernement, les paysans et les indigènes qui manifestaient contre le coup d'État sont assassinés, avec un total de 35 morts et plus de 800 blessés.

Le 25 novembre, des membres des forces paramilitaires du gouvernement de facto ont occupé le siège de la Fédération des travailleurs paysans de Santa Cruz pour brûler leur matériel et leurs documents. Ces opérations se poursuivent encore aujourd'hui. Le vendredi 17 janvier, il a été rapporté que les antennes de la société ENTEL, fournisseur d'accès aux services de communication cellulaire et radio, ont été éliminées dans plusieurs provinces rurales.

Le 6 décembre, le gouvernement de facto a approuvé le décret présidentiel DS n° 4100, qui avait pour but d'indemniser les familles des 35 morts et des centaines de blessés de la répression policière et militaire, à condition qu'elles renoncent à leur droit de porter l'affaire devant les Nations unies ou d'autres organismes de défense des droits humains.

À cet égard, la CIDH (Commission interaméricaine des droits humains) a exprimé sa préoccupation vis-à-vis du décret, compte tenu de l'inclusion d'une clause qui rendrait impossible pour les victimes de faire appel aux organismes internationaux pour dénoncer les crimes dont elles ont été victimes, ce qui constitue une violation de traités internationaux tels que le traité de Rome, qui prévoit le principe de non-application de la prescription en cas de crimes contre l'humanité. La mission d'observation de la CIDH, qui a recueilli de nombreux témoignages sur les massacres de Sacaba et Senkata, a dénoncé qu'en Bolivie il n'y a **"aucune garantie d'indépendance du pouvoir judiciaire"**.

Les persécutions, les arrestations arbitraires et les menaces de mort contre les anciennes autorités du gouvernement Evo Morales, ainsi que contre les dirigeants des organisations sociales et du MAS sont quotidiennes. La judiciarisation de la contestation sociale et de la liberté d'expression est évidente (incendies de maisons, lynchages, attaques racistes, etc.).

Les bureaux des Médiateurs de Bolivie ont également été victimes de harcèlement, principalement dans la ville de Cochabamba, tant au siège de cette institution qu'au domicile de ses représentants et de leurs familles.

D'autre part, le harcèlement permanent à l'ambassade et à la résidence du Mexique, viole toutes les conventions et accords internationaux qui protègent les représentations diplomatiques des différents pays. Le refus de délivrer un laissez-passer aux personnes ayant demandé l'asile politique, qui a par ailleurs été accordé par ledit pays, constitue une violation flagrante des droits humains et politiques des personnes.

Il faut relever la persécution de hauts fonctionnaires du gouvernement Morales qui sont réfugiés à l'ambassade du Mexique à La Paz et à qui l'on refuse un laissez-passer pour quitter le pays, comme le ministre de la présidence, Juan Ramon Quintana ; l'ancien ministre Hugo Moldiz ; la ministre de la Culture Wilma Alanoca ; le gouverneur d'Oruro Victor Hugo Vazquez ; le directeur de l'Agence digitale du gouvernement Nicolas Laguna ; le ministre de la Défense Javier Zavaleta ; le ministre de la Justice Hector Arce, le ministre des Mines Cesar Navarro et d'autres.

Il est clair que les accusations portées contre les anciennes autorités font partie d'une stratégie de persécution politico-judiciaire, connue sous le terme de "Lawfare", qui vise à annuler la participation politique du MAS-IPSP aux prochaines élections prévues pour le 3 mai.

Le ministre du gouvernement de facto, Arturo Murillo, a déclaré qu'il se lancerait dans une "chasse" contre les membres du gouvernement démis et du MAS. Il a rendu publique son intention de traduire Evo Morales devant la Cour pénale internationale de La Haye "pour crimes contre l'humanité", lui reprochant les 35 morts, même après sa démission et son exil du pays. Les massacres de Senkata, Sacaba, Huayllani, Ovejuyo, etc., ont été documentés par différentes organisations internationales des droits humains et par des pays amis. Les informations de première main recueillies par ces organisations témoignent de la brutalité du coup d'État en Bolivie.

L'utilisation d'adjectifs offensants et dénigrants en raison de leur contenu discriminatoire est fréquente de la part du gouvernement de facto, notamment les termes "sauvages", "narcoterroristes", "vandales", "criminels", etc., employés à l'encontre des membres du gouvernement d'Evo Morales et des organisations sociales qui le soutiennent, ainsi que des missions internationales d'observation des droits humains, du Bureau du médiateur et même des journalistes, qu'ils qualifient de "guerriers du numérique" ou de "terroristes informatiques".

Murillo célèbre et se vante de la peur semée au sein de la population au nom de la "pacification" au moyen de la brutalité policière et militaire contre la subversion des "hordes indigènes et masistas". Ils "s'entretuent", "nous ne tolérerons pas les terroristes ou les séditionnaires, nous les surveillons", déclare-t-il

Le gouvernement de facto imposé par la violence des groupes paramilitaires et policiers, ainsi que par les forces armées, a éliminé les droits fondamentaux de manifester et le droit de vote qui n'a pas été reconnu par les élites qui désormais gouvernent le pays comme elles l'avaient fait pendant les 180 ans de la République coloniale et excluante. El gobierno de facto ha militarizado el país y reprimido cualquier tipo de protesta haciendo demostraciones de fuerza con militares y armas de guerra en las calles de las principales ciudades de Bolivia.

L'argument et le recours à la menace terroriste, la dénonciation de l'existence de noyaux subversifs ou de groupes masistas séditionnaires et armés justifient la nécessité de créer des unités spéciales de police pour la lutte contre le terrorisme conseillées par le gouvernement d'Israël, comme l'affirme le ministre de facto Murillo. C'est la justification de plus de violence et de brutalité répressive de la part de l'État.

L'existence d'activités séditionnaires et terroristes est assurée pour justifier la répression, l'impunité est accordée aux forces militaires pour massacrer les populations indigènes, le pays est militarisé et des démonstrations de force avec des armes de guerre sont effectuées.

La violation systématique des droits de l'homme, des libertés publiques et des droits et garanties individuels est le résultat évident de l'existence d'un régime dictatorial imposé par un coup d'État civique, policier et militaire.

L'élimination de toutes les sources d'information indépendantes fait partie de la stratégie de mise en œuvre d'un siège médiatique.

Les organismes de défense des droits humains du monde entier doivent faire pression pour mettre fin à la persécution politique et à la répression menées par les bandes paramilitaires protégées par la police et l'armée.

Pour les raisons précitées :

Nous condamnons le coup d'État exécuté et financé par les forces antidémocratiques de la droite bolivienne et d'autres forces étrangères qui visent à reprendre le contrôle des importantes ressources naturelles du pays telles que le lithium et le gaz.

Nous condamnons fermement les messages de haine et de racisme, ainsi que l'extrême violence perpétrée par les partisans de la droite radicale antidémocratique contre les peuples indigènes et les paysans.

Nous condamnons fermement le "Lawfare" déployé par le gouvernement de facto en mettant en place un mécanisme pervers de persécution politique par le biais de lynchages médiatiques continus, de fabrication de dossiers judiciaires et de violation permanente de conventions, de normes internationales et de la Constitution de la Bolivie.

Nous exigeons des forces armées et de la police nationale bolivienne qu'elles veillent et protègent, avant tout, la vie et la dignité de toute personne se trouvant sur le territoire bolivien, quelles que soient ses affinités politiques ou sa nationalité, ainsi que de respecter l'immunité des représentations diplomatiques et de protéger leurs fonctionnaires, les demandeurs d'asile et leurs installations.

Nous appelons toutes les forces démocratiques à condamner ce coup d'État violent, ainsi que les violations quotidiennes de toutes les libertés individuelles, sociales, juridiques, culturelles et politiques de la grande majorité.

Nous demandons à la Commission des droits humains des Nations unies, sur la base des rapports, enquêtes et témoignages de la CIDH, du Bureau du médiateur bolivien et d'autres organisations de défense des droits humains, de condamner sans équivoque la violation systématique des droits des citoyens, la répression brutale, les meurtres et tous les autres abus perpétrés par le gouvernement de facto, et d'élaborer d'urgence un rapport sur la situation des droits humains en Bolivie.

Nous vous demandons également de continuer à dénoncer ce coup d'État auprès de toutes les instances internationales, de la presse et des autorités de tous les États du monde.

**NON AU COUP D'ÉTAT EN BOLIVIE !
NON A LA MILITARISATION EN BOLIVIE !**

Suisse, le 19 janvier 2020

Die De-facto-Regierung in Bolivien und ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Seit den Wahlen vom 20. Oktober 2019 befindet sich Bolivien in der schlimmsten politischen Krise seiner Geschichte. Das Wahlgericht bestätigte den Sieg von Evo Morales mit 47,08% der abgegebenen Stimmen mit einer Differenz von mehr als 10% (648.180 Stimmen) gegenüber dem Kandidaten Carlos Mesa, was zum Sieg der Wahlen im ersten Wahlgang reichte.

Der erste Betrugsvorwurf der OAS löste Gewalt von Seiten der oppositionellen Schockgruppen aus, die die Wahlgerichte auf Departement-Ebene und den Sitz der Partei Bewegung zum Sozialismus MAS-IPSP niederbrannten. Viele Behörden wie die Bürgermeisterin von Vinto in Cochabamba Patricia Arce, der ehemalige stellvertretende Minister für interkulturelle Angelegenheiten Feliciano Vegamonte, der Präsident der Abgeordnetenkammer Victor Borda, der Bergbauminister Cesar Navarro und ihre Familien wurden entführt und brutal angegriffen, so dass sie gezwungen waren, ihre Ämter niederzulegen.

Die Meuterei der Polizeikräfte im ganzen Land und der einquartierten Streitkräfte gab Anlass zu einer Terrorkampagne gegen "Masismo", deren Mitglieder bedroht, entführt, gefoltert, ihre Häuser in einer Atmosphäre völliger Straflosigkeit niedergebrannt wurden, was sie zum Rücktritt zwang, wenn sie Behörden wie die Bürgermeisterin von Vinto in Cochabamba waren.

Mit der Forderung des Rücktritts von Präsident Evo Morales durch den Kommandanten der Streitkräfte wurde er am 10. November zum Rücktritt gezwungen mit dem Argument, dass diese Entscheidung der Gewalt der Opposition und ihrer schockierenden und paramilitärischen Gruppen (Motoqueros) ein Ende setzen würde.

Nachdem der Putsch mit dem Rücktritt von Evo Morales abgeschlossen war, wurde die Repression gegen die von Polizei und Armee unterstützten paramilitärischen Gruppen entfesselt, indem die Demonstranten, die die Regierung verteidigten, als "Mobs", "Vandalen", "Radikale" oder "Delinquenten" bezeichnet wurden. Die sozialen Netzwerke und die mehrheitlich und fast hegemoniale Privatpresse führten eine Hetzkampagne zugunsten des Staatsstreichs durch.

Der Präsident des Bürgerkomitees von Santa Cruz, Fernando Camacho, der Hauptführer der paramilitärischen Banden, drohte den "Masistas", Regierungsbehörden und Geschäftsleuten in Santa Cruz, die mit der Regierung von Evo Morales sympathisieren, mit einer Liste von Verrätern, die nach dem Vorbild von Pablo Escobar in Kolumbien zur Beseitigung bereit sind.

Die Opposition gegen die Regierung von Präsident Evo Morales bildete bewaffnete Milizen, die von der bolivianischen Polizei offen unterstützt wurden. Gruppen wie die Unión Juvenil Cruceñista, die von der Internationalen Föderation für Menschenrechte als "paramilitärische faschistische Gruppe" definiert wurde, waren die Hauptverantwortlichen für die Repression.

Die Medien von Campesino-Organisationen wie der CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), deren Direktor José Aramayo an einen Baum gefesselt und gefoltert wurde, wurden ebenso angegriffen und zerstört wie die Medien von sozialen Basisorganisationen wie den Gemeinde-Radiosendern (RPOs) oder dem staatlichen Fernsehsender BTv. Als Unterstützer der Regierung wurden Journalisten und Medienmitarbeiter des öffentlichen Dienstes angegriffen, gedemütigt und an der Arbeit gehindert.

Eine Liste von Orten, die zu blockieren sind, wurde über soziale Netzwerke in Umlauf gebracht, darunter die Hauptquartiere von Ministerien und anderen staatlichen Institutionen, die Residenzen von Regierungsbeamten und die diplomatischen Vertretungen von Kuba und Venezuela. Infolge falscher Anschuldigungen begannen gewalttätige Gruppen mit der ständigen Schikanie dieser Botschaften und der ständigen Verfolgung ihres diplomatischen Personals,

bis sie das Land verlassen konnten. Diese Gewalttätigkeiten verstoßen gegen das Völkerrecht, das Wiener Abkommen und andere internationale Verträge.

Wie von den Menschenrechtsorganisationen, die in das Land kamen, bestätigt wurde, wurde am 15. November ein Marsch von Bauern der sechs Verbände des «Trópico de Cochabamba» in Sacaba angegriffen, mit neun Toten und Dutzenden von Verwundeten. Durch von den Bauern selbst aufgenommene Videos wurde der Einsatz von Kriegswaffen deutlich gemacht. Die Streitkräfte handelten an diesem Tag unter dem Schutz der DS Nr. 4078, die es ihnen erlaubte, ohne weitere Verantwortung Kriegswaffen einzusetzen.

Dasselbe geschah in Senkata, El Alto, und verursachte fünf Tage später den Tod von mindestens 10 Menschen und Dutzende von Verwundeten. Die Repressionskräfte, bestehend aus Polizei und Armee, gaben an, gegen "Terroristen" vorzugehen, die eine Explosion in der Gasanlage provozieren wollten. Die sozialen Bewegungen, ehemalige Regierungsmitglieder, Bauern und Indigene, die gegen den Staatsstreich demonstrierten, wurden angegriffen, mit insgesamt 35 Toten und mehr als 800 Verwundeten.

Am 25. November besetzten Mitglieder des paramilitärischen Arms der De-facto-Regierung das Hauptquartier der Föderation der Landarbeiter von Santa Cruz, um ihre Ausrüstung und ihre Dokumentation zu verbrennen. Diese Aktion dauert bis heute an. Am Freitag, den 17. Januar wurde berichtet, dass die Antennen der Firma ENTEL in mehreren ländlichen Provinzen, die Zugang zu Mobilfunk- und Funkdiensten bieten, eliminiert wurden.

Am 6. Dezember genehmigte die De-facto-Regierung DS Nr. 4100, dessen Zweck es war, die Familien der 35 Toten und Hunderte von Verwundeten von der Polizei und der militärischen Repression zu entschädigen, mit der Bedingung, dass sie darauf verzichten, den Fall vor die Vereinten Nationen oder andere Menschenrechtsorganisationen zu bringen.

In diesem Zusammenhang äußerte die IACHR (Interamerikanische Menschenrechtskommission) ihre Besorgnis über das Dekret, da es eine Klausel enthält, die es den Opfern unmöglich macht, sich an internationale Gremien zu wenden, um die Verbrechen, deren Opfer sie waren, unter Verletzung internationaler Verträge wie dem Vertrag von Rom, der den Grundsatz der Nichtanwendbarkeit der gesetzlichen Verjährungsfristen bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorsieht, anzuprangern. Die IACHR-Beobachtungsmission, die zahlreiche Zeugenaussagen über die Massaker von Sacaba und Senkata gesammelt hat, prangerte an, dass in Bolivien "keine Garantie für die Unabhängigkeit der Justiz besteht".

Verfolgung, willkürliche Verhaftungen und Todesdrohungen gegen ehemalige Behörden der Regierung Evo Morales sowie gegen Führer von sozialen Organisationen und der MAS sind an der Tagesordnung. Die gerichtliche Verfolgung des sozialen Protests und der Meinungsfreiheit (Hausbrände, Lynchmorde, rassistische Angriffe usw.) ist offensichtlich.

Auch das Büro des bolivianischen Ombudsmanns wurde vor allem in der Stadt Cochabamba schikaniert, sowohl in den Büros dieser Einrichtung als auch in den Privatwohnungen ihrer Vertreter und deren Familien.

Auf der anderen Seite, die ständige Belästigung der Botschaft und der Residenz von Mexiko, verstößt gegen alle Konventionen und internationalen Vereinbarungen, die die diplomatischen Vertretungen der verschiedenen Länder beschützen müssen. Die ebenfalls von diesem Land gewährte Nichtgewährung von sicherem Geleit für Personen, die politisches Asyl beantragt haben, stellt eine eklatante Verletzung der menschlichen und politischen Rechte der Menschen dar.

Erwähnenswert ist die Verfolgung hoher Beamter der Regierung Morales, die in der mexikanischen Botschaft in La Paz untergebracht sind und denen die Ausstellung eines Passierscheins verweigert wird, damit sie das Land verlassen können, wie z.B. der Minister der Präsidentschaft, Juan Ramón Quintana; Der ehemalige Minister Hugo Moldiz; Kulturministerin Wilma Alanoca; Oruro-Gouverneur Victor Hugo Vazquez; E-Government-Direktor Nicolas Laguna; Verteidigungsminister Javier Zavaleta; Justizminister Hector Arce, Bergbau-Minister Cesar Navarro und andere.

Es ist klar, dass die Anschuldigungen gegen die ehemaligen Behörden Teil einer Strategie der politisch-gerichtlichen Verfolgung sind, die "Lawfare" genannt wird und die darauf abzielt, die politische Beteiligung der MAS-IPSP an den für den 3. Mai geplanten Wahlen zu annullieren.

Der De-facto-Regierungsminister, Arturo Murillo, erklärte, er werde auf eine "Jagd" gegen Mitglieder der entlassenen Regierung und der MAS gehen. Er gab seine Absicht bekannt, Evo Morales vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag "wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit" zu bringen und machte ihn für die 35 Todesfälle verantwortlich, auch nach seinem Rücktritt und seiner Verbannung aus dem Land. Die Massaker von Senkata, Sacaba, Huayllani, Ovejuyo, etc. wurden von verschiedenen internationalen Menschenrechtsorganisationen und befreundeten Ländern dokumentiert. Die Informationen aus erster Hand, die von diesen Organisationen gesammelt wurden, zeugen von der Brutalität des Staatsstreichs in Bolivien.

Die Verwendung von Adjektiven, die wegen ihres diskriminierenden Inhalts beleidigend und verunglimpfend sind, ist häufig von Seiten der De-facto-Regierung, wie z.B. der Bezugnahme auf "Wilde", "Narkoterroristen", "Vandalen", "Kriminelle" usw., gegen Mitglieder der Regierung von Evo Morales und die sie unterstützenden gesellschaftlichen Organisationen, sowie internationale Menschenrechtsbeobachtungsmissionen, das Büro des Ombudsmanns und sogar Journalisten, die sie als "digitale Krieger" oder "Computer-Terroristen" bezeichnen.

Murillo, feiert und prahlt mit der Angst, die in den Menschen für die "Befriedung" durch Polizei/Militär-Brutalität gegen die Subversion der "indigenen und Masista-Horden" gesät wurde. Sie "töten sich gegenseitig", "Wir werden keine Terroristen oder Aufwiegler tolerieren, wir beobachten sie", sagt er.

Die durch die Gewalt der paramilitärischen und polizeilichen Gruppen sowie der Streitkräfte auferlegte De-facto-Regierung schaffte die den heute regierenden Eliten unbekanntes Grundrecht auf Proteste und Wahlen ab, wie sie es in den 180 Jahren der kolonialen und die indigenen Völker ausschließenden Republik getan hatten.

Die De-facto-Regierung hat das Land militarisiert und jede Art von Protest unterdrückt, indem sie in den Straßen der wichtigsten Städte Boliviens mit Militär- und Kriegswaffen demonstriert hat.

Das Argument und der Appell an die terroristische Bedrohung, die Anprangerung der Existenz subversiver Kerne oder bewaffneter massenorientierter aufrührerischer Gruppen rechtfertigen die Notwendigkeit der Schaffung von Sonderpolizeieinheiten zur Terrorismusbekämpfung, die von der israelischen Regierung beraten werden, wie derselbe De-facto-Minister Murillo behauptet. Dies ist die Rechtfertigung für mehr Gewalt und repressive staatliche Brutalität.

Die Existenz von aufrührerischen und terroristischen Aktivitäten ist gesichert, um die Repression zu rechtfertigen, den Streitkräften wird Straffreiheit für die Massaker an der indigenen Bevölkerung gewährt, das Land wird militarisiert und Gewaltdemonstrationen werden mit dem Einsatz von Kriegswaffen durchgeführt.

Die systematische Verletzung der Menschenrechte, der öffentlichen Freiheiten und der individuellen Rechte und Garantien ist ein offensichtliches Ergebnis der Existenz eines diktatorischen Regimes, das durch einen Staatsstreich der Bürger, der Polizei und des Militärs verhängt wurde.

Die Eliminierung aller unabhängigen Informationsquellen ist Teil der Strategie zur Umsetzung einer Medienbelagerung

Menschenrechtsorganisationen in aller Welt müssen auf ein Ende der politischen Verfolgung und Repression durch paramilitärische Banden drängen, die von der Polizei und dem Militär geschützt werden.

Aus den oben genannten Gründen :

Wir verurteilen den Staatsstreich, der von antidemokratischen rechten bolivianischen Kräften und anderen ausländischen Kräften, die versuchen, die Kontrolle über die wichtigen natürlichen Ressourcen des Landes wie Lithium und Gas wiederzuerlangen, durchgeführt und finanziert wurde.

Wir verurteilen die Botschaften von Hass und Rassismus sowie die extreme Gewalt, die von den Anhängern der antidemokratischen radikalen Rechten gegen die indigenen, bäuerlichen Völker verübt werden, auf das Schärfste.

Wir verurteilen scharf die "Lawfare" der De-facto-Regierung, die eine perverse Maschinerie der politischen Verfolgung durch kontinuierlichen Lynchmord in den Medien, die Herstellung von Rechtsfällen und die permanente Verletzung jeder Konvention, internationaler und verfassungsmäßiger Normen Boliviens eingesetzt hat.

Wir fordern die Streitkräfte und die bolivianische Nationalpolizei auf, vor allem das Leben und die Würde jeder Person auf bolivianischem Gebiet, unabhängig von ihrer politischen Zugehörigkeit oder Nationalität, zu bewachen und zu schützen, sowie die Immunität der diplomatischen Vertretungen zu respektieren und ihre Beamten, Asylsuchenden und Einrichtungen zu schützen.

Wir rufen alle demokratischen Kräfte auf, diesen gewaltsamen Putsch sowie die täglichen Verletzungen, die alle individuellen, sozialen, rechtlichen, kulturellen und politischen Freiheiten der großen Mehrheit verletzen, zu verurteilen.

Wir bitten die UN-Menschenrechtskommission, auf der Grundlage der Berichte, Untersuchungen und Zeugenaussagen der IACHR, des Büros des bolivianischen Ombudsmanns und anderer Menschenrechtsorganisationen, die systematische Verletzung der Bürgerrechte, die brutale Repression, die Morde und alle anderen Missbräuche, die von der De-facto-Regierung begangen werden, unmissverständlich zu verurteilen.

Wir fordern Sie auch weiterhin auf, diesen Staatsstreich vor allen internationalen Gremien, der Presse und den Behörden aller Staaten der Welt anzuprangern.

**NEIN ZUM STAATSTREICH IN BOLIVIEN!
NEIN ZUR MILITARISIERUNG IN BOLIVIEN!**

Schweiz, 19. JANUAR 2020

Firmantes / Signatories / Signataires / Unterzeichnende :

Suiza :

1. **ALBA – Suiza**
2. **Asociación Suiza – Cuba**
3. **Asociación Aipazcomun**
4. Patricia Salomon Aldunate
5. Cristian Saavedra Salomon
6. Amanda Fluri

UK – Reino Unido :

7. **SUMA QAMAÑA**
8. Héctor Fernandez, SUMA QAMAÑA
9. Dr Francisco Dominguez, Middlesex University

Bélgica :

10. **ARLAC ASBL**
11. **Red Europea de Asociaciones Chilenas por los Derechos Cívicos y Políticos**

Suecia :

12. **Asociación África, Latinoamérica, Suecia y Gambia**
13. Musa Bangura, Presidente de la Asociación África, Latinoamérica, Suecia y Gambia
14. Eduardo Miranda, Secretario de la Asociación África, Latinoamérica, Suecia y Gambia

Nicaragua :

15. **ÁBACOenRed, iniciativa pedagógica con proyección nustramericana**
16. Herman Van de Velde, pedagogo

España :

17. **Plataforma Global contra las Guerras Internacional con sede en España**
18. Patricia Silvia Mascañan Tolon

Francia :

19. Alex Anfruns, periodista independiente
20. Romain Migus, écrivain et journaliste

Venezuela :

21. Francisco González, abogado activista internacional en derechos humanos
22. Thierry Deronne, realizador

Italia :

23. **ALBAInFormazione**

México :

24. Dr. Gilberto López y Rivas, profesor investigador del INAH Morelos, articulista de La Jornada